

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q3/GRC/1

25 de junio de 1998

(98-2561)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

GRECIA¹

El presente documento reproduce la declaración introductoria formulada por la delegación de Grecia, las preguntas formuladas a la delegación de Grecia y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales efectuado en la reunión del Consejo celebrada del 26 al 30 de mayo de 1997.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

A. PATENTES

La Ley Nº 1733/1987 es el principal instrumento que estipula la protección mediante patente en la República Helénica. El texto de la Ley fue notificado a la Organización Mundial del Comercio conforme al **párrafo 2** del **artículo 63** del Acuerdo sobre los ADPIC en el documento IP/N/1/GRC/P/1.

Contiene disposiciones sobre la materia patentable, las condiciones de patentabilidad, los requisitos y el procedimiento para el registro, los derechos conferidos por una patente, los recursos en caso de infracción de la patente y la estructura y los cometidos de la Organización de la Propiedad Industrial, que es la Oficina de Patentes de Grecia.

La legislación sobre patentes ha sido recientemente modificada en 1995 para ajustarla al **párrafo 1** del **artículo 27** y a los artículos 31 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. Conforme a la primera modificación, se introdujo un período de validez de la patente de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud también respecto de las patentes presentadas antes de la entrada en vigor de la Ley Nº 1733/1987.

La segunda modificación es pertinente a las licencias obligatorias. Según la disposición anterior, se asimilaba la importación de un producto patentado procedente de un Estado miembro de la Unión Europea a la explotación de la patente en la República Helénica. La nueva disposición prevé en los mismos términos la importación de cualquier país de la OMC.

¹En relación con las leyes y los reglamentos pertinentes a las esferas objeto de examen notificadas por Grecia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/GRC/1/Rev.1, IP/N/1/GRC/P/1-4 e IP/N/1/GRC/L/1-2.

²El acta de la reunión se ha distribuido en el documento IP/C/M/13.

B. TOPOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

La protección de las topografías de productos semiconductores se establece en el Decreto Presidencial N° 415/1191, recientemente modificado por el Decreto Presidencial N° 415/1195. Las disposiciones pertinentes se notificaron a la Organización Mundial del Comercio conforme al párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC en los documentos IP/N/1/GRC/L/1 e IP/N/1/GRC/L/2.

Ambos decretos se expidieron en cumplimiento de la Directiva del Consejo 87/54/EEC (EEL 24, 36) de 16 de diciembre de 1986 y la Decisión del Consejo 90/510/EEC (EEL 285, 29) enmendadas por las Decisiones 93/17/EEC (EEL 11, 22) de 26 de noviembre de 1987, 94/700/EC (EEL 284, 61), 94/828/EC (EEL 351, 12) y 95/237/EC (EEL 158, 38), y definen las condiciones para la protección, los requisitos para el registro, los derechos conferidos por la inscripción y los recursos contra la infracción.

II. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE PRIORIDAD³

¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro de la OMC?

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Patentes griega (es decir, la Ley N° 1733/1987), se reconoce un derecho de prioridad a título recíproco a todos los solicitantes que hayan presentado debidamente una solicitud de patente anterior en el extranjero. De acuerdo con el mencionado artículo, los nacionales de un país del Convenio de París tienen derecho a alegar la prioridad fundándose en una anterior solicitud de patente presentada en uno de los países de la Unión.

Tras la ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC por la República Helénica, que incorpora el artículo 4 del Convenio de París, se reconoce un derecho de prioridad a todos los nacionales de países Miembros de la OMC -sean o no miembros del Convenio de París- en virtud del párrafo 3 del artículo 1 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, la interpretación de los citados artículos corresponde a los tribunales griegos competentes.

III. REPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN

1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable: 1) las plantas y los animales; 2) las obtenciones vegetales y las variedades animales.

No se concede ninguna patente de obtenciones vegetales o variedades animales (artículo 5, párrafo 8 b) de la Ley N° 1733/1987) ni de procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales. La única excepción prevista se refiere a los procedimientos microbiológicos o sus productos patentables.

2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los derechos exclusivos que confieren las patentes.

Sí. Según los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del artículo 10 de la Ley N° 1733/1987, el acto de oferta para la venta está incluido entre los derechos exclusivos del titular de la patente.

³En la reunión del Consejo de los ADPIC del 27 de febrero de 1997, los Miembros acordaron contestar a esta pregunta en el contexto del presente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).

3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los derechos exclusivos que confiere la patente.

El titular de una patente no puede prohibir las siguientes actividades, según el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley N° 1733/1987:

- a) la utilización de la invención con fines no profesionales o de investigación;
- b) la utilización de la invención incorporada a un automóvil, tren, buque o aeroplano que entre en el territorio griego con carácter temporal;
- c) la preparación de un producto farmacéutico en una farmacia para un individuo determinado con arreglo a una receta médica, así como la oferta y la utilización del mencionado producto farmacéutico;
- d) en caso de que alguien haya explotado ya su invención o procedido a los preparativos requeridos para dicha explotación en el momento de presentar una solicitud de patente por parte de un tercero o en el momento de la fecha de prioridad, esta persona tiene derecho a utilizar esa invención para su empresa profesional y para sus necesidades.

4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin autorización de su titular, incluido el uso por el Gobierno o por terceros autorizados por el Gobierno.

Se permite el uso de la invención sin autorización del legítimo titular en los siguientes casos:

- a) Se permite la utilización por terceros en las siguientes condiciones:
 - ha transcurrido un plazo de tres años desde la concesión de la patente o un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente;
 - la invención de que se trate no ha sido explotada en Grecia o, en caso de que lo haya sido, la producción de sus productos es insuficiente para cubrir la demanda local;
 - el tercero se halla en situación de explotar productivamente la invención objeto de la patente;
 - el tercero notificó al titular de la primera patente, con un mes de antelación al inicio de las actuaciones judiciales, su intención de solicitar una licencia no contractual (artículo 13 de la Ley N° 1733/1987).
- b) Se permite el uso de la invención por el titular de una patente (segunda patente) en relación con una invención reclamada en una patente anterior (primera patente) en las siguientes condiciones:
 - la invención reclamada en la segunda patente se relaciona con la invención de la primera patente;
 - la invención reclamada en la segunda patente entraña un adelanto apreciable en relación con la invención reclamada en la primera patente;

- la explotación productiva de la segunda invención no es posible sin infringir la primera patente;
 - en ese caso, el titular de la primera patente tiene derecho si así lo solicita a una licencia cruzada de la segunda patente (párrafo 4 del artículo 13 de la Ley N° 1733/1987).
- c) Se permite el uso de la invención por el Gobierno únicamente por razones imperativas de servicio a la salud pública o a la defensa nacional tras una decisión justificada del Ministro de Desarrollo y cualquier otro Ministro competente.

Sólo se concede una licencia cuando la invención de que se trate no ha sido explotada productivamente en Grecia o si la producción es insuficiente para satisfacer la demanda local y a condición de que el titular de la patente perciba una remuneración. Antes de dictarse la decisión pertinente, se consulta al titular de la patente para que exprese su opinión (artículo 14 de la Ley N° 1733/1987).

5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1 y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.

Según el párrafo 6 del artículo 17 de la Ley N° 1733/1987, cuando la invención se refiere al procedimiento de fabricación de un producto, se presume que todo producto de la misma naturaleza ha sido fabricado con el procedimiento patentado.

6. Sírvanse explicar cómo se protege en su país la información no divulgada, como lo requiere el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La información no divulgada está protegida por los artículos 16 y 17 de la Ley N° 1733/1987, que prevén una pena de hasta seis meses de prisión y/o una multa para toda persona que revele información confidencial.

Además, el Código Penal (artículos 249 y 252) estipula la imposición de un deber general de confidencialidad que pesa sobre los funcionarios públicos.

Sin embargo, hay disposiciones específicas en la legislación de la propiedad intelectual que protegen contra la revelación de información confidencial:

- a) Según el párrafo 2 del artículo 22 de la Ley N° 1733/1987, la información contenida en los contratos de transferencia de tecnología se mantiene en secreto. El registro y la documentación de la transferencia de tecnología son de naturaleza confidencial (párrafo 2 del artículo 4 de la Ley N° 1733/1987) y se establece una pena de hasta seis meses de prisión y/o una multa por toda revelación por parte de un empleado de la Organización de la Propiedad Industrial.
- b) Según el párrafo 5 del artículo 4 de la Ley N° 1733/1987 se estipula una pena de hasta 10 años de prisión o, en caso de guerra, de cadena perpetua o de muerte, por la revelación de información contenida en el registro confidencial de patentes, relacionadas con la defensa nacional, por parte de un empleado de la Organización de la Propiedad Industrial. La obligación de guardar el secreto rige mientras el funcionario ocupa el cargo y por un plazo de 10 años después de su separación del servicio.

- c) Toda la información que figura en las solicitudes de patente se mantiene en secreto durante 18 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, a menos que la patente ya se haya concedido (párrafos 12 y 13 del artículo 7 de la Ley N° 1733/1987).

También figuran garantías y obligaciones de confidencialidad en las siguientes disposiciones:

i) *Ley sobre la Competencia de Grecia (Ley 703/1997)*

El artículo 27 de la Ley sobre la Competencia griega se refiere a la obligación de guardar secreto. Según este artículo, toda información presentada como consecuencia de la aplicación de esta Ley, de forma voluntaria u obligatoria, debe tratarse como información confidencial. Esta información será comunicada al Presidente del Comité de Competencia por los funcionarios autorizados que adjuntarán a su informe los documentos pertinentes. Este informe y los documentos adjuntos pueden incluirse en el expediente que presente al Comité de Competencia, el Tribunal Administrativo de Apelaciones de Atenas y el Consejo de Estado, con lo que deja de ser confidencial. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, en caso de que se descubra un delito, el hecho deberá comunicarse inmediatamente.

ii) *Ley de Sociedades (Ley 2190/1920)*

Define como información confidencial "todo cuanto llegue a conocimiento de un funcionario público en el ejercicio de sus deberes al controlar una sociedad limitada de carácter privado". En especial, el párrafo 3 del artículo 22a dispone, respecto de una sociedad anónima, que "todo miembro del consejo de administración estará obligado a guardar estrictamente los secretos de la sociedad, que haya llegado a conocer debido a sus competencias como consultor".

Igualmente, el párrafo 4 del artículo 39 de la misma Ley concede y adjudica al accionista de una sociedad que tenga un 1 por ciento del capital integrado el derecho de solicitar información.

El establecimiento de un marco que reglamente el exceso que la Ley no permite, parte del concepto de que hay que proteger el desarrollo de la actividad de la empresa de los instrumentos administrativos de la sociedad anónima, cuya corrección es de orden público.

El párrafo 1 del artículo 23 de la misma Ley estipula además que "se prohíbe a los consultores que participen en la administración para realizar actos sometidos a determinados fines de la empresa, sin el permiso de la asamblea general".

Por la misma razón, en el caso ka del párrafo 1 del artículo 63 de la Ley 2190/1920 se dice expresamente que "un funcionario público, de los que supervisen una sociedad anónima, que no guarde absoluto secreto respecto de lo que haya observado en el funcionamiento de la sociedad, será castigado [...] con pena de prisión y una sanción administrativa".

Finalmente, en el artículo 16 de la Ley 1599/86, se enuncia como disposición general el procedimiento para ejercitar el "derecho a informarse sobre los documentos administrativos". Más en particular, todo ciudadano tiene derecho a tomar información de los documentos administrativos fuera de los que se refieren a la esfera privada o a la vida familiar de un tercero. Se entiende por documentos administrativos todos los documentos del sector público.

No obstante, los servicios del sector público pueden negarse a satisfacer este derecho:

- a) En los casos en que se omite el secreto de la convocatoria, respecto del secreto del crédito público o de la defensa nacional, del orden público, de la moneda, el secreto

médico, bancario, comercial o industrial o cualquier otro que se rija por disposiciones especiales.

- b) En los casos en que causaría dificultades a las investigaciones de las autoridades judiciales, policiales, militares o administrativas, con referencia a la comisión de un delito o de una violencia administrativa.

iii) *Empresas y actuarios de seguros*

Los elementos notificados por las autoridades de supervisión son los que es posible publicar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 2190/1920. También es aplicable lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 63 de la mencionada ley (véase *supra* el párrafo 1, referente a la Ley de Sociedades).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto Presidencial 400/70 relativo a las empresas de seguros, igualmente aplicable, toda persona que ejerza o haya ejercido alguna actividad para el servicio pertinente del Ministerio de Desarrollo está obligada por el secreto profesional y no puede notificar a ninguna otra persona o autoridad la información confidencial adquirida en el ejercicio de sus deberes, a reserva de lo previsto en casos de infracción penal.

Tiene carácter confidencial toda la información que llegue a conocimiento del servicio pertinente del Ministerio de Desarrollo y no figure en el libro registrado de la sociedad anónima.

En caso de violación de las disposiciones sobre el secreto profesional, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 371 del Código Penal.

iv) *Ley sobre los Títulos Valores*

La Ley N° 1806/88 califica como confidencial todo elemento de información de carácter concreto, relativa a una sociedad cuyas acciones se coticen en bolsa, que no haya sido publicada ni haya llegado de otra manera a ser de conocimiento general y de tal naturaleza que, de haber sido conocida, pudiera haber influido apreciablemente en el valor de las acciones de la sociedad de que se trate.

v) *Ley sobre la Banca*

La Ley N° 1059/1971 estipula que todos los depósitos mantenidos en cuentas de depósito en bancos que operen en Grecia se consideran de carácter confidencial y que nadie está facultado para revelar a nadie ningún detalle al respecto, ni siquiera con el permiso del titular de la cuenta. Hay dos grandes excepciones a esta regla. Se permite la comunicación de esos datos:

- a) cuando la causa por un delito muy grave se halla en la fase de instrucción o está pendiente de la decisión de un tribunal, y en tal caso sólo en virtud de una solicitud debidamente justificada del acusador o del tribunal, y
- b) cuando se han de revelar detalles de los depósitos de que se trate a los empleados del Banco de Grecia o a cualquier otro órgano encargado de la supervisión de los bancos y sus operaciones, en cuyo caso dichos empleados quedan a su vez ligados por el mismo deber de confidencialidad.

vi) *Ley Tributaria*

La Ley N° 1828/1989 considera que debe mantenerse en secreto la siguiente información, por lo que se prohíbe su publicación, comunicación o transmisión por cualquier medio a terceros, es decir, a cualquier otra parte que no sea la persona directamente interesada: 1) las mismas recaudaciones fiscales, 2) todos los datos tributarios, 3) todos los informes y decisiones pertinentes del inspector fiscal y 4) todos los elementos que figuran en el expediente tributario directa o indirectamente relacionados con la tributación de que se trate. El *Areios Pagos* (el Tribunal Supremo de Grecia) ha resuelto que si algún delito es objeto de investigación por las autoridades judiciales, no es jurídicamente posible impedir que esas autoridades obtengan datos relativos a la situación fiscal de la persona afectada.

IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. El apartado c) del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley sobre la transferencia de tecnología, las invenciones y las innovaciones tecnológicas de Grecia declara no patentables los programas de ordenador. Sírvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones se considera no patentable a pesar de cumplir los requisitos de ser nueva y útil y entrañar una actividad inventiva:

- a) **las invenciones de procedimientos que consistan, total o parcialmente, en actos cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;**
- b) **las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de ejecución informatizada, incluyendo en particular:**
 - i) **los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o una memoria de ordenador; y**
 - ii) **los ordenadores de uso general cuya novedad respecto del estado anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con determinado programa de ordenador.**

Si alguno de estos tipos de invenciones no son patentables, sírvanse explicar de qué modo cumple la legislación sobre patentes de Grecia las obligaciones del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, con arreglo al cual todas las categorías de invenciones deben ser patentables sin discriminación.

La no patentabilidad de los programas de ordenador en cuanto tales conforme al apartado c) del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley N° 1733/1987 no excluye que se patenten invenciones relacionadas con el ordenador. Así, las invenciones comprendidas en las categorías especificadas en la pregunta 1 a) y b) pueden obtener la protección mediante patente en la medida en que pueda determinarse su aportación al estado de la técnica, como se defina en las alegaciones. Si hay que considerar que la invención resuelve un problema de naturaleza esencialmente técnica, puede llenar los requisitos para la protección.

2. Sírvanse explicar de qué modo cumple con el párrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC el artículo 12 de la Ley sobre la transferencia de tecnología, las invenciones y la innovación tecnológica de Grecia, que impone una limitación al derecho del titular de la patente en cuanto a ceder derechos o concertar contratos de licencia al darles eficacia únicamente después de su inscripción en el registro de patentes.

El requisito del párrafo 1 del artículo 12 de la Ley N° 1733/1987 no significa que no sea válida la operación entre las partes que han firmado un acuerdo. Se exige el registro para notificar a terceros la transmisión de los derechos.

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

En la respuesta a la pregunta 2 acerca del registro de contratos y cesiones de licencia, Grecia afirma que el requisito del registro tiene por fin notificar a terceros la transmisión de los derechos. ¿Qué penalizaciones, si hay alguna, se derivan de la omisión del registro o qué otras consecuencias tiene la omisión? Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas penalizaciones o consecuencias con el párrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley N° 1733/1987 no prevé ninguna penalización por la omisión del registro de una cesión de derechos. Sin embargo, dado que el requisito del registro es el único medio de notificar a terceros la transmisión de los derechos, el incumplimiento de este requisito puede afectar a las reclamaciones de las partes interesadas en una actuación judicial frente a terceros que actúen de buena fe. En una controversia judicial, la carga de la prueba pesa sobre el titular de que el tercero no actúa de buena fe. Corresponde al juez evaluar la validez de esa alegación. De esta manera, el requisito del registro en modo alguno impone ninguna restricción al derecho del titular de la patente de ceder o transmitir una patente o concertar un acuerdo de licencia.

3. El artículo 13 de la Ley sobre la transferencia de tecnología, las invenciones y la innovación tecnológica de Grecia no parece exigir que el solicitante de una licencia obligatoria demuestre que ha intentado obtener la autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables. En apariencia, el solicitante sólo necesita notificar al titular de la patente un mes antes de promover los procedimientos judiciales para obtener una licencia obligatoria. Sírvanse explicar cómo se cumplen, en relación con el artículo 13, las condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias que figuran en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La notificación prevista en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 13 de la Ley N° 1733/1987 tiene por objeto una posible negociación entre las partes interesadas antes de recurrir a actuaciones judiciales.

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

Si bien la notificación al titular de una primera patente de que una parte se propone solicitar una licencia obligatoria puede obedecer al propósito de estimular posibles negociaciones entre el tenedor y la parte interesada en la licencia, descarga el peso de las negociaciones sobre el tenedor, si éste desea evitar la imposición de una licencia. Sírvanse explicar cómo esta disposición es compatible con el apartado b) del artículo 31 conforme al cual el potencial usuario de una patente, antes de procurarse una licencia obligatoria, ha de haber intentado obtener la autorización del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables sin que esos intentos hayan surtido efecto en un plazo prudencial.

Con la ratificación del Acuerdo sobre los ADPIC por el Parlamento griego, la disposición del apartado b) del artículo 31 se ha convertido en parte integrante de la legislación nacional.

Según el párrafo 1 del artículo 28 de la Constitución de la República Helénica, las disposiciones ratificadas de los tratados internacionales prevalecen sobre toda disposición en contrario de la Ley.

Aunque el apartado d) del párrafo 1 del artículo 13 de la Ley N° 1733/1987 no contiene expresamente ningún requisito de que la parte interesada intente obtener la autorización del titular de

la patente en términos y condiciones comerciales razonables, debe entenderse que la incorporación del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC al derecho griego introduce ese requisito.

Cabe observar, no obstante, que la disposición de que se trata nunca se ha utilizado en Grecia, lo que dificulta la evaluación de los aspectos prácticos de su aplicación. En cualquier caso, según el párrafo 5 del artículo 13 de la Ley N° 1733/1987, una petición de licencia no contractual viene siempre acompañada del parecer de la Organización de la Propiedad Industrial sobre los términos de la remuneración que se ha de pagar al propietario de la patente. El párrafo 6 del artículo 13 de la Ley N° 1733/1987, conforme al cual las licencias de ese tipo sólo se pueden conceder mediante decisión judicial en la que figuren, entre otras cosas, la cuantía y las condiciones de la remuneración que se ha de pagar, proporciona una ulterior salvaguardia a los derechos del titular.

4. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado anualmente en Grecia desde el 1° de enero de 1993.

No se ha concedido hasta ahora ninguna licencia obligatoria.

5. Sírvanse indicar de qué modo se protegen en Grecia las informaciones no divulgadas, y la base jurídica de esa protección. [NOTA: a la fecha en que se prepararon estas preguntas no se había distribuido por la Secretaría de la OMC ninguna notificación de Grecia acerca de la protección de las informaciones no divulgadas.]

La información no divulgada está protegida por los artículos 16 y 17 de la Ley N° 1733/1987, que prevén una pena de hasta seis meses de prisión y/o una multa para toda persona que revele información confidencial.

Además, el Código Penal (artículos 249 y 252) estipula la imposición de un deber general de confidencialidad que pesa sobre los funcionarios públicos.

Sin embargo, hay disposiciones específicas en la legislación de la propiedad intelectual que protegen contra la revelación de información confidencial:

- a) Según el párrafo 2 del artículo 22 de la Ley N° 1733/1987, la información contenida en los contratos de transferencia de tecnología se mantiene en secreto. El registro y la documentación de la transferencia de tecnología son de naturaleza confidencial (párrafo 2 del artículo 4 de la Ley N° 1733/1987) y se establece una pena de hasta seis meses de prisión y/o una multa por toda revelación por parte de un empleado de la Organización de la Propiedad Industrial.
- b) Según el párrafo 5 del artículo 4 de la Ley N° 1733/1987 se estipula una pena de hasta 10 años de prisión o, en caso de guerra, de cadena perpetua o de muerte, por la revelación de información contenida en el registro confidencial de patentes, relacionadas con la defensa nacional, por parte de un empleado de la Organización de la Propiedad Industrial. La obligación de guardar el secreto rige mientras el funcionario ocupa el cargo y por un plazo de 10 años después de su separación del servicio.
- c) Toda la información que figura en las solicitudes de patente se mantiene en secreto durante 18 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, a menos que la patente ya se haya concedido (párrafos 12 y 13 del artículo 7 de la Ley N° 1733/1987).

También figuran garantías y obligaciones de confidencialidad en las siguientes disposiciones:

i) *Ley sobre la Competencia de Grecia (Ley 703/1997)*

El artículo 27 de la Ley sobre la Competencia griega se refiere a la obligación de guardar secreto. Según este artículo, toda información presentada como consecuencia de la aplicación de esta Ley, de forma voluntaria u obligatoria, debe tratarse como información confidencial. Esta información será comunicada al Presidente del Comité de Competencia por los funcionarios autorizados que adjuntarán a su informe los documentos pertinentes. Este informe y los documentos adjuntos pueden incluirse en el expediente que presente al Comité de Competencia, el Tribunal Administrativo de Apelaciones de Atenas y el Consejo de Estado, con lo que deja de ser confidencial. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, en caso de que se descubra un delito, el hecho deberá comunicarse inmediatamente.

ii) *Ley de Sociedades (Ley 2190/1920)*

Define como información confidencial "todo cuanto llegue a conocimiento de un funcionario público en el ejercicio de sus deberes al controlar una sociedad limitada de carácter privado". En especial, el párrafo 3 del artículo 22a dispone, respecto de una sociedad anónima, que "todo miembro del consejo de administración estará obligado a guardar estrictamente los secretos de la sociedad, que haya llegado a conocer debido a sus competencias como consultor".

Igualmente, el párrafo 4 del artículo 39 de la misma Ley concede y adjudica al accionista de una sociedad que tenga un 1 por ciento del capital integrado el derecho de solicitar información.

El establecimiento de un marco que reglamente el exceso que la Ley no permite, parte del concepto de que hay que proteger el desarrollo de la actividad de la empresa de los instrumentos administrativos de la sociedad anónima, cuya corrección es de orden público.

El párrafo 1 del artículo 23 de la misma ley estipula además que "se prohíbe a los consultores que participen en la administración para realizar actos sometidos a determinados fines de la empresa, sin el permiso de la asamblea general".

Por la misma razón, en el caso ka del párrafo 1 del artículo 63 de la Ley N° 2190/1920 se dice expresamente que "un funcionario público, de los que supervisen una sociedad anónima, que no guarde absoluto secreto respecto de lo que haya observado en el funcionamiento de la sociedad, será castigado [...] con pena de prisión y una sanción administrativa".

Finalmente, en el artículo 16 de la Ley N° 1599/86, se enuncia como disposición general el procedimiento para ejercitar el "derecho a informarse sobre los documentos administrativos". Más en particular, todo ciudadano tiene derecho a tomar información de los documentos administrativos fuera de los que se refieren a la esfera privada o a la vida familiar de un tercero. Se entiende por documentos administrativos todos los documentos del sector público.

No obstante, los servicios del sector público pueden negarse a satisfacer este derecho:

- a) En los casos en que se omite el secreto de la convocatoria, respecto del secreto del crédito público o de la defensa nacional, del orden público, de la moneda, el secreto médico, bancario, comercial o industrial o cualquier otro que se rija por disposiciones especiales.
- b) En los casos en que causaría dificultades a las investigaciones de las autoridades judiciales, policiales, militares o administrativas, con referencia a la comisión de un delito o de una violencia administrativa.

iii) *Empresas y actuarios de seguros*

Los elementos notificados por las autoridades de supervisión son los que es posible publicar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 2190/1920. También es aplicable lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 63 de la mencionada Ley (véase *supra* el párrafo 1, referente a la Ley de Sociedades).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto Presidencial 400/70 relativo a las empresas de seguros, igualmente aplicable, toda persona que ejerza o haya ejercido alguna actividad para el servicio pertinente del Ministerio de Desarrollo está obligada por el secreto profesional y no puede notificar a ninguna otra persona o autoridad la información confidencial adquirida en el ejercicio de sus deberes, a reserva de lo previsto en casos de infracción penal.

Tiene carácter confidencial toda la información que llegue a conocimiento del servicio pertinente del Ministerio de Desarrollo y no figure en el libro registrado de la sociedad anónima.

En caso de violación de las disposiciones sobre el secreto profesional, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 371 del Código Penal.

iv) *Ley sobre los Títulos Valores*

La Ley N° 1806/88 califica como confidencial todo elemento de información de carácter concreto, relativa a una sociedad cuyas acciones se coticen en bolsa, que no haya sido publicada ni haya llegado de otra manera a ser de conocimiento general y de tal naturaleza que, de haber sido conocida, pudiera haber influido apreciablemente en el valor de las acciones de la sociedad de que se trate.

v) *Ley sobre la Banca*

La Ley N° 1059/1971 estipula que todos los depósitos mantenidos en cuentas de depósito en bancos que operen en Grecia se consideran de carácter confidencial y que nadie está facultado para revelar a nadie ningún detalle al respecto, ni siquiera con el permiso del titular de la cuenta. Hay dos grandes excepciones a esta regla. Se permite la comunicación de esos datos:

- a) cuando la causa por un delito muy grave se halla en la fase de instrucción o está pendiente de la decisión de un tribunal, y en tal caso sólo en virtud de una solicitud debidamente justificada del acusador o del tribunal, y
- b) cuando se han de revelar detalles de los depósitos de que se trate a los empleados del Banco de Grecia o a cualquier otro órgano encargado de la supervisión de los bancos y sus operaciones, en cuyo caso dichos empleados quedan a su vez ligados por el mismo deber de confidencialidad.

vi) *Ley Tributaria*

La Ley N° 1828/1989 considera que debe mantenerse en secreto la siguiente información, por lo que se prohíbe su publicación, comunicación o transmisión por cualquier medio a terceros, es decir, a cualquier otra parte que no sea la persona directamente interesada: 1) las mismas recaudaciones fiscales, 2) todos los datos tributarios, 3) todos los informes y decisiones pertinentes del inspector fiscal y 4) todos los elementos que figuran en el expediente tributario directa o indirectamente relacionados con la tributación de que se trate. El *Areios Pagos* (el Tribunal Supremo de Grecia) ha resuelto que si algún delito es objeto de investigación por las autoridades judiciales, no es jurídicamente posible impedir que esas autoridades obtengan datos relativos a la situación fiscal de la persona afectada.

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

El párrafo 2 del artículo 39 exige que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que se divulgue la información que satisfaga determinadas condiciones o sea adquirida o utilizada por terceros de manera contraria a los usos comerciales honestos. La respuesta de Grecia a la pregunta 5 indica que se pueden imponer sanciones penales a quienes sin autorización revelen información no divulgada, pero la respuesta da a entender que las personas físicas o jurídicas que controlen esa información no pueden impedir que se revele. La descripción de las leyes no indica que ni siquiera se aborde la adquisición y la utilización de la información no divulgada por personas no autorizadas. Sírvanse explicar en detalle cómo, conforme a la ley griega, la parte que tiene bajo su control la información no divulgada puede impedir que se revele a personas no autorizadas o sea adquirida o utilizada por ellas de manera contraria a los usos comerciales honestos, como lo exige el párrafo 2 del artículo 39.

Según el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley N° 146/1914 contra la competencia desleal, toda persona que como empleado, obrero o aprendiz de una empresa comercial o de otra índole, revele a terceros, sin autorización, secretos comerciales o industriales que le fueron confiados durante su empleo con fines de competencia o de causar un daño gratuito al dueño de la empresa, será condenado a una pena de hasta seis meses prisión y/o a una multa.

La misma pena se establece, conforme al párrafo 2 del artículo 16 de la Ley N° 146/1914 contra la competencia desleal, para quienquiera que, sin autorización, explote o comunique a terceros con fines de competencia, secretos comerciales o industriales de los cuales tiene conocimiento como consecuencia de una de las comunicaciones mencionadas en el párrafo 1 o mediante acto propio que sea contrario a la ley o a la moral.

Idéntica pena se prevé, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley N° 146/1914 contra la competencia desleal, para la persona que, sin autorización, explote o comunique a terceros dibujos o reglas de naturaleza técnica que se le hayan confiado en el curso de las actividades de la empresa.

Además de reprimir la revelación de secretos comerciales e información comercial de carácter confidencial mediante acciones penales, la misma Ley estipula también en el párrafo 1 de su artículo 18 una acción por los daños y perjuicios experimentados a causa de alguna de las mencionadas infracciones. Sin embargo, es más común que la parte perjudicada interponga una demanda por incumplimiento de contrato.

Las restantes disposiciones descritas en nuestra respuesta inicial a la pregunta 5, junto con los antes mencionados artículos, proporcionan un marco jurídico suficiente contra la revelación de información confidencial.

6. Sírvanse indicar la naturaleza de las medidas que adoptan las autoridades judiciales de Grecia, si existe alguna, para proteger la confidencialidad de las informaciones no divulgadas suministradas por las partes en los procedimientos judiciales, cuando esa información se ha proporcionado para hacer valer derechos relativos a ella o con otros fines.

Según el párrafo 1 del artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, las vistas de los tribunales se desarrollan en público. Sólo en casos excepcionales puede un tribunal celebrar un juicio *in camera* a fin de proteger el orden o la moralidad públicos.

Sin embargo, en virtud del párrafo 2 del artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, un testigo puede negarse a testificar en un juicio si su deposición ha de contener información relacionada con un secreto comercial. Además conforme al párrafo 2 del artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, los litigantes o cualquier persona puede negarse a presentar un documento que

podría ser útil como prueba para el procedimiento, cuando el documento contenga información relacionada con un secreto comercial.

Pesa sobre todo testigo en un juicio penal un deber general de declarar (artículo 209 del Código de Procedimiento Penal), con la única excepción prevista en el caso de información privilegiada revelada a ciertas personas como un abogado, un notario público o un asesor técnico, etc. (artículo 212 del Código de Procedimiento Penal). Los documentos relacionados con una investigación penal tiene que entregarse a las autoridades judiciales, a menos que la persona, por ejemplo, un abogado, en posesión del documento declare por escrito que contiene información privilegiada referente a su profesión (artículo 261 del Código de Procedimiento Penal).

7. Sírvanse explicar las medidas que se hayan aplicado en Grecia, si se ha aplicado alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las autoridades de reglamentación de Grecia, en relación con un pedido de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas, datos de pruebas u otros no divulgados, y sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, si existen, con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

i) Protección de los datos de pruebas efectuadas para la comercialización de productos químicos utilizados en la agricultura (Ministerio de Agricultura)

- a) En lo que se refiere a la protección de los estudios para expedir la aprobación para la circulación en el mercado de compuestos que contengan nuevas sustancias activas, se observa lo dispuesto en la Directiva 91/414 de las CE y en especial su artículo 13.
- b) Para la protección de los estudios de compuestos que contengan nuevas sustancias activas, conocidas por la Unión Europea, se observa lo dispuesto en nuestra legislación nacional (Ley N° 721/77 y Ley N° 1845/89 y las Decisiones Ministeriales conexas) hasta que se sometan nuevamente a aprobación sobre la base de la Directiva 91/414 de las CE.

Según nuestra legislación nacional, no se prevé ningún intervalo de tiempo concreto para la protección de los estudios. No obstante, a fin de expedir una aprobación para la circulación de un compuesto específico, todos los estudios previstos por la legislación deben presentarse en el expediente del compuesto.

En consecuencia, conforme a nuestra legislación, no es posible utilizar estudios que no hayan sido cedidos por su propietario a la persona que solicita la aprobación de la circulación de un compuesto.

- c) De acuerdo con el Reglamento del Consejo Europeo N° 1610/96, también cabe proteger los productos para la protección vegetal.

ii) Confidencialidad de los datos relativos a productos químicos

El Laboratorio Químico General del Estado es la autoridad competente en el sistema de la UE para aceptar los expedientes de notificación con todos los datos de pruebas de la nueva sustancia antes de que ésta entre en el mercado. Para este procedimiento en particular, la Ley griega dispone la plena confidencialidad, para productos tanto patentados como no patentados.

iii) Protección de los datos de pruebas relativo a productos medicinales

- a) La Organización Nacional de Medicamentos ha adoptado todas las directivas y reglamentos de la UE referentes a los procedimientos conducentes a la autorización

de la comercialización de productos medicinales. En particular, la Directiva 65/65, modificada en el párrafo 8 del artículo 4, describe algunos aspectos de la protección de datos que hemos llevado a la práctica.

- b) Según la Ley 1316/83 de Grecia, todo el personal de la Organización Nacional de Medicamentos (inclusive los miembros de los comités) están obligados a guardar la necesaria reserva respecto de cualquier tipo de información relacionada con sus tareas.⁴

[Pregunta complementaria formulada por los Estados Unidos]

Sírvanse verificar que los datos de pruebas y demás información presentada por un solicitante de aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas no pueden ser utilizados por otros solicitantes de aprobación de la comercialización sin el consentimiento de la parte que presentó los datos.

Véase la respuesta a la pregunta 7 *supra*.

8. Con arreglo al Decreto Ministerial 9392/91 de Grecia, la protección de los datos suministrados a los organismos de reglamentación griegos en relación con las gestiones realizadas para obtener la aprobación para la comercialización está condicionada a la coexistencia de una patente que abarque el producto reglamentado. Sírvanse explicar de qué modo cumple esta práctica las disposiciones del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no condicionan la protección contra la competencia desleal respecto de los datos de pruebas a la existencia simultánea de una protección mediante patente.

Por lo que respecta a la precedente pregunta, hemos pedido a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ciertas aclaraciones necesarias acerca de su número de referencia de la Decisión Ministerial o el Decreto Presidencial 9392/91 de Grecia.

⁴La delegación de Grecia ha informado de que esta respuesta abarca asimismo la siguiente pregunta complementaria.